



ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN

ENTRE

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Y

**LA PROCURADORA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE EL SALVADOR**

REUNIDOS

El Juez EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT, mayor de edad, actuando en calidad de Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Procuradora RAQUEL CABALLERO DE GUEVARA, mayor de edad, abogada y notaria, del domicilio de San Salvador, actuando, en mi calidad de Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, en nombre y representación de la PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, institución de derecho público con domicilio principal en la ciudad de San Salvador; personería que es legítima en virtud de Decreto Legislativo número cuatrocientos noventa y dos, de fecha veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial número ciento setenta y cinco, Tomo número cuatrocientos doce, del día veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, por medio del que se me eligió como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos para el período de tres años, que inicia a partir de esa misma fecha y concluye el veintiuno de septiembre de dos mil diecinueve; y en el que consta además que, previo a tomar posesión del cargo, rendí la correspondiente protesta constitucional.

CONSIDERANDO

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que tiene como parte de sus funciones el difundir el resultado de su trabajo relacionado con la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, así como establecer relaciones más estrechas con los diversos órganos judiciales de los Estados.



Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene como interés el contribuir al fortalecimiento del sistema de protección de los Derechos Humanos en América, mediante la promoción y divulgación de los instrumentos fundamentales del sistema interamericano de los derechos humanos.

Que el mandato de rango constitucional (Art. 194 Romano I Cn.), de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, establece como funciones: velar por el pleno respeto y garantía de los derechos humanos, asistir a las presuntas víctimas de los mismos, promover y proponer medidas necesarias en orden a prevenir las violaciones a los derechos humanos, supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas y formular conclusiones y recomendaciones, así como desarrollar un programa permanente de actividades de promoción sobre el conocimiento y respeto de los Derechos Humanos, entre otras funciones específicas.

Que el mandato de la Procuradora tiene por cometido la defensa y promoción en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República de El Salvador, Leyes y Tratados vigentes; así como los contenidos en declaraciones y principios aprobados por la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americano.

Que la Ley de la PDDH en el art. 12 ordinal 8º, dispone que el Procurador o Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos podrá crear, fomentar y desarrollar nexos de comunicación y cooperación con diversos sectores de la vida nacional.

Que ambas Partes coinciden en la necesidad de unir esfuerzos para lograr una mejor aplicación y difusión de los instrumentos internacionales rectores de los derechos humanos, y para llevar a cabo proyectos de investigación conjunta en temas de interés mutuo.

POR TANTO

Encontrándose las Partes firmantes debidamente facultadas, en virtud de su investidura,

ACUERDAN

PRIMERA: Ambas Instituciones se comprometen a coordinar esfuerzos para fortalecer sus relaciones, profundizar el conocimiento del derecho y difundir los instrumentos internacionales para la promoción y defensa de los derechos humanos, todo en beneficio la población y en aras de mejorar la Administración Pública y en especial la de justicia.



SEGUNDA: Con el propósito de alcanzar las metas propuestas, ambas Partes acuerdan llevar a cabo de manera conjunta las siguientes actividades:

1. Realización de congresos, seminarios, coloquios, simposios, conferencias, foros bilaterales o multilaterales, que permitan alcanzar los fines propuestos por ambas Partes.
2. Realización de prácticas profesionales del personal técnico de la PDDH en la Corte Interamericana de Derechos Humanos bajo los calendarios y requisitos establecidos por la Corte para estos programas. Siendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos una institución judicial, se dará prioridad a profesionales de Derecho. Estas prácticas profesionales y pasantías se realizarán una vez al año en alguno de los períodos establecidos por la Corte. La Procuradora, se compromete a facilitar los permisos requeridos por el personal para dar cumplimiento a dicha práctica. La persona seleccionada será acreditada mediante comunicación escrita dirigida a la Corte.
3. Desarrollo de actividades jurídicas y de investigación conjuntas, de interés mutuo de las Partes.
4. La Procuradora de acuerdo a su mandato constitucional y legal valorará la posibilidad de realizar acciones para facilitar el acceso de las víctimas de violaciones a derechos humanos al sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
5. Acceso a la jurisprudencia y a las publicaciones de ambas instituciones disponibles en el sitio *web*. Además del intercambio de aquellas publicaciones que se emiten en forma impresa con el fin de acrecentar el acervo bibliográfico de ambas instituciones.
6. Incorporar la dirección electrónica de ambas instituciones en sus listas de sitios de interés, de manera que se garantice el acceso electrónico directo a sus correspondientes sitios *web*.
7. La participación de funcionarios que pertenezcan a alguna de las Partes, a los respectivos programas o cursos de capacitación y formación que pueda impartir la otra Parte; quedando por tanto estas personas sujetos a las normas internas de la Institución que imparta el programa o curso.
8. Facilitar a las personas investigadoras de ambas organizaciones el acceso a sus respectivas Bibliotecas, de tal forma que puedan realizar sus investigaciones para promover el desarrollo humano.



9. Cualquier otra actividad que contribuya a la mejora de conocimientos del personal de ambas instituciones que sea acordada por ambas Partes dentro del marco del Convenio.

TERCERA: Las Partes acuerdan crear un Comité integrado por un funcionario/a de cada una de sus Instituciones, el cual servirá de enlace entre las mismas. En el caso de la PDDH la persona del Comité de enlace será designado por la Señora Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. En el caso de la Corte Interamericana, la persona será designada por el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

CUARTA: Las Partes podrán utilizar toda la información intercambiada en virtud de este acuerdo, excepto en aquellos casos en que la Parte que lo suministró haya establecido restricciones o reservas de uso o difusión.

Ambas Partes podrán publicar y divulgar el material que editen de manera conjunta, del modo que estimen conveniente, haciendo constar en su caso su origen y finalidad.

QUINTA: Las actividades que se realicen de manera conjunta no involucrarán relaciones de subordinación. El personal comisionado por cada una de las Partes continuará bajo la dirección y dependencia de la institución a la que pertenezcan, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la otra, a la que en ningún caso se le considerará como patrón sustituto.

SEXTA: El personal enviado por una de las Partes, se someterá en el lugar de su estancia, a las disposiciones de la legislación nacional vigente en el país receptor y a las disposiciones, normas y reglamentos en la cual se ocupe. Este personal no podrá dedicarse a ninguna actividad ajena a sus funciones, ni podrá recibir remuneración alguna fuera de la establecida, sin la previa autorización de las autoridades competentes y conforme la normativa que le rige.

SÉPTIMA: Las diferencias que pudieran surgir de la interpretación o aplicación de este acuerdo, serán resueltas por las Partes de común acuerdo.

OCTAVA: Este acuerdo podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes, formalizado a través de comunicaciones escritas en las que se especifique la fecha de su entrada en vigor.

NOVENA: Este acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una duración indefinida, pudiendo darse por terminado por cualquiera de las Partes mediante notificación escrita, dirigida a la otra, por lo menos con tres meses de antelación a la fecha en que se desee dejarlo sin efecto. En todo caso, las actividades que se encuentren en curso con arreglo a los planes de actividades o acuerdos específicos, habrán de ser finalizadas.



DECIMA: Este acuerdo no implica erogaciones o asignaciones presupuestarias específicas para su implementación.

Firmado en la ciudad de San Salvador, El Salvador, a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo estos textos igualmente auténticos.

**Por la
CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHO HUMANOS**

**Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Presidente**



**Por la
PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS**

**Raquel Caballero de Guevara
Procuradora**



